

El peso de la razón pública en la emisión del voto

Ponentes: Dr. Francisco Muro González y Dr. Marco Antonio Elías Salazar

Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Correos-e de los ponentes fmurog@gmail.com y marcoantonioelias@hotmail.com

Tema del congreso: Opinión pública y comunicación política

Introducción

Se parte en esta ponencia de la presunción de que no se ha versado con suficiencia en el ámbito académico de México sobre el tema de la *razón pública*, cuestión fundamental en el debate público actual pues, como ha argüido uno de sus principales propulsores, John Rawls, lo que es substancia fundamental de la razón pública es justamente el bien del público.

Y si uno se asoma un tanto a la propaganda electoral y a los escasos y superficiales debates inter-partidarios que se dan al respecto del bien del público en México, no se ve oferta sistemática alguna sobre la mejora de la razón pública en nuestro país. Esa temática fundamental está, por decir lo menos, difusa o muy escasamente estructurada en nuestro entorno nacional, así como las propuestas de reivindicar de manera sistemática el bienestar del público mexicano (especialmente el zacatecano) en general, si no es que son de plano inexistentes los planteamientos al respecto.

El propio IFE (anterior denominación del actual INE), en un texto que se publicó en el 2012, denominado *Guía para la promoción del voto libre y razonado*, incluye en una sola página un capítulo denominado justamente “El voto como producto del ejercicio de la razón pública”, señalando que “Un voto razonado y responsable es aquel que resulta del ejercicio de la razón pública, es decir, un voto que el ciudadano decide libremente con base en una discusión informada y tolerante de los problemas colectivos y con plena conciencia de la forma en que el ejercicio de este derecho influye en la toma de decisiones políticas”.

Hasta ahí, quien esto suscribe no encontró algún otro desarrollo de la idea de razón pública en el ámbito de la literatura disponible sobre asuntos electorales, especialmente en español y

con alusión a nuestro país, México, cuestión que, como trataremos de hacer ver en lo que sigue, es medular en el ejercicio de la democracia.

Así pues, para reiterar, en una revisión un tanto rápida de la bibliografía disponible (cuando menos en el Internet), uno se podrá percatar que no existe un estudio en español que gire, con alguna suficiencia, en torno a la razón pública específicamente en el ámbito electoral.

La ponencia propuesta consiste, entonces en, primero, definir lo que es la razón pública, siguiendo sobre todo el pautado que ofrece el mismo John Rawls, autor fundamental en el desarrollo y notoriedad de esa denominación.

Se habrá asimismo de destacar, dentro de la revisión de los textos de Rawls (especialmente dentro de uno de los más conocidos, *Political Liberalism*), que el ideal de la ciudadanía impone un deber moral, no legal: el deber de la civilidad, para poder llegar a acuerdos respecto de las cuestiones fundamentales dentro de una sociedad. De forma semejante, habremos de versar acerca de cómo las políticas y los principios a los que presuntamente se hace alusión en una campaña electoral deben fundarse en los valores políticos de la razón pública.

Pero más todavía que el interés de desarrollar un ensayo sobre la razón pública de acuerdo a Rawls, en esta ponencia lo que se quiere poner de relieve es lo ignorado que está el término aludido, así como el mismo Rawls –investigador de primer nivel en la Universidad de Harvard, fallecido en el 2002–en el contexto académico de nuestro país, especialmente en el ámbito de la ciencia política y, de manera precisa, en el espacio electoral. Y justamente la razón pública en su nexo con la política, especialmente la política electoral y gubernamental, es tema principal en la obra de Rawls.

Desconocer entonces la centralidad del uso público de la razón en el funcionamiento de la democracia no sólo distorsiona y limita la historia de las ideas democráticas, también distrae la atención lejos de los procesos interactivos a través de los cuales funciona una democracia y sobre los que ésta funda su probable éxito.

El descuido de las raíces globales del uso público de la razón conlleva asimismo al extravío del papel de la democracia en el mundo. Incluso con la difusión del sufragio para los mayores de edad y las elecciones justas, la deliberación libre de censura es importante para que la gente sea capaz de determinar lo que debe exigir, lo que debe criticar y la forma en que debe votar.

Así pues, no tomar en cuenta la centralidad del tema del uso público de la razón en el campo de la democracia, especialmente en las lides electorales, distorsiona y limita no sólo la historia de las ideas democráticas, sino que de igual cuenta distrae la atención de los procesos interactivos a través de los cuales funciona una democracia y sobre los que ésta puede fundar su éxito. En ese ámbito, el descuido de las raíces globales del uso público de la razón conlleva al descuido de una comprensión adecuada del lugar y el papel de la democracia en el mundo contemporáneo.

Desde la perspectiva más amplia del uso público de la razón, la democracia de cualquier nación debe otorgar un espacio central para garantizar la libertad de la discusión pública y dar margen a las interacciones deliberativas en la teoría y la práctica políticas, no sólo en el ámbito de las elecciones.

Lo que se requiere, como preocupaba a Rawls –recuerda el premio Nobel Amartya K. Sen a Rawls, quien conoció muy bien a Rawls en Harvard, y quien ha difundido en importante medida el pensamiento rawlsiano– es el resguardo de la "diversidad de doctrinas y el hecho de la pluralidad", que resulta central para la cultura pública de las democracias modernas, y que debe ser asegurado en una democracia por medio de derechos y libertades básicos.

La validez del uso público de la razón se aplica al debate sobre la democracia misma. Es bueno que las prácticas democráticas hayan sido sometidas al agudo escrutinio en los textos sobre asuntos mundiales, pues existen deficiencias identificables en el desempeño de muchos países que poseen instituciones democráticas. El debate público sobre estas deficiencias no sólo es un medio efectivo para tratar de remediarlas, sino que es así exactamente como se

supone que debe funcionar la democracia: bajo la forma del uso público de la razón. En este sentido, los defectos de la democracia exigen más democracia.

Ciertamente, el voto es sólo un medio, aunque sin lugar a dudas un medio muy importante, para hacer efectivo el debate público, siempre y cuando la oportunidad de votar se combine con la oportunidad de hablar y escuchar sin temor alguno. La fuerza y el alcance de las elecciones dependen en gran medida de la posibilidad del debate público abierto.

Mas el ideal de la razón pública sólo rige para los ciudadanos cuando éstos se comprometen en la defensa de una determinada política en el extenso foro público (más ahora con la disponibilidad del Internet), como hacen, por ejemplo, los miembros de partidos políticos y los candidatos en sus campañas, o como también lo hacen otros grupos que les dan apoyo. La razón pública debe regir el modo en el que los ciudadanos han de votar en las elecciones cuando las esencias constitucionales y las cuestiones de justicia básica están en juego.

De modo que el ideal de la razón pública no sólo debe gobernar el discurso público electoral en la medida en que los asuntos tratados impliquen cuestiones fundamentales, sino que debe regir también sobre el modo en que los ciudadanos han de votar sobre esas cuestiones.

El ideal del uso público de la razón

El ideal del uso público de la razón está asimismo relacionado estrechamente con dos prácticas sociales particulares que merecen atención específica: la tolerancia hacia opiniones distintas (junto con la posibilidad de estar o no de acuerdo) y el fomento al debate público.

Una segunda característica importante del liberalismo político –tema también abordado con maestría por Rawls –se refiere a los contenidos de la razón pública. Originalmente Rawls intentó derivar el contenido de la razón pública de la concepción política de la justicia. Él modificó, sin embargo, esa característica del liberalismo político y lo conecta de manera explícita a la razón pública a través de las concepciones políticas de la justicia.

En general, las concepciones políticas razonables son las que justifican las constituciones bajo el criterio de *reciprocidad*, concepto este también integrado al esquema teórico-filosófico de Rawls. Más específicamente, una concepción política razonable debe incluir, conforme a Rawls, lo siguiente: 1) en primer lugar, una lista de ciertos derechos, libertades y oportunidades (como los usuales de los regímenes constitucionales); 2) en segundo lugar, una asignación de prioridad especial a los derechos, libertades y oportunidades, particularmente con respecto a las afirmaciones del bien público en general; y 3) medidas para asegurar a todos los ciudadanos suficientes medios para hacer efectivo el uso de sus libertades.

Una concepción política públicamente justificada puede entonces servir de base para razonar en lo que Rawls llama preguntas fundamentales, es decir, las relativas a elementos constitucionales esenciales y cuestiones de justicia social básica. Cuando esta clase de asuntos fundamentales están en juego, las directrices y el contenido de la razón pública sirven como un límite en las razones que llevan a la toma de decisiones y a la deliberación democrática.

Así que, conforme a Rawls, la razón pública es característica de un pueblo democrático: es la razón de sus ciudadanos, de aquellos que comparten la condición de ciudadanía equitativa. El sujeto de la razón pública es el bien del público, por lo que la concepción política de justicia requiere de la estructura básica y las instituciones de la sociedad, y los propósitos y fines son servir a la ciudadanía.

La razón pública y el voto

La razón pública, pues, es pública de tres maneras: como razón de los ciudadanos en cuanto tales, es la razón del público; su objeto es el bien público y las cuestiones de justicia fundamental; y su naturaleza y contenido, son públicos, y están dados por los ideales y

principios expresados por la concepción de la justicia política que tiene la sociedad, ideales y principios desarrollados de un modo abierto y visible.

Ignorar, por tanto, la centralidad del uso público de la razón en el campo de la democracia, especialmente en las lides electorales, distorsiona y limita no sólo la historia de las ideas democráticas, sino que también distrae la atención de los procesos interactivos a través de los cuales funciona una democracia, procesos sobre los que ésta puede fundar su éxito. En ese ámbito, el descuido de las raíces globales del uso público de la razón conlleva al descuido de una comprensión adecuada del papel de la democracia en el mundo contemporáneo.

Autores reconocidos de esta corriente coinciden en el tema. El mismo John Rawls, así como el premio Nobel 1998 en Ciencias Económicas, Amartya K. Sen, quienes, desde una perspectiva más amplia del uso público de la razón, cree que la democracia debe otorgarle a ese tema un lugar central para garantizar la libertad de discusión pública y las interacciones deliberativas en la teoría y la práctica políticas, no sólo a través de las elecciones ni para las elecciones. Lo que se requiere, como observa Rawls, es el resguardo de la "diversidad de doctrinas, el hecho de la pluralidad", que resulta central para "la cultura pública de las democracias modernas".

La validez del uso público de la razón se aplica entonces al debate mismo sobre la democracia. Es positivo que las prácticas democráticas hayan sido sometidas al escrutinio del público en los textos sobre asuntos mundiales, pues existen deficiencias identificables en el desempeño de muchos países que poseen instituciones democráticas estandarizadas.

El debate público sobre estas deficiencias no sólo es un medio efectivo para tratar de remediarlas, sino que es de esa forma como se supone que debe funcionar la democracia, bajo la forma del uso público de la razón. En este sentido, los defectos de la democracia exigen más democracia.

De esa guisa, como ya se ha señalado, el tema fundamental de la razón pública es el bien del público. La razón pública, entonces, sigue Rawls, es pública de tres maneras: como la razón

de los ciudadanos como tales, es la razón del público; su tema es el bien del público y los asuntos de la justicia social fundamental; y su naturaleza y contenido son públicos, siendo dados por los ideales y principios expresados por la concepción de la justicia política de la sociedad, y conducidos de manera visible sobre esa base.

Rawls establece claramente al sujeto de la razón pública: el bien del público, es decir, lo que la concepción política de la justicia requiere de la estructura básica de las instituciones de la sociedad, y de sus propósitos y fines, es alcanzar el bien del público.

La razón pública, para esto, no significa simplemente la razón secular. Doctrinas Integrales seculares (como doctrinas religiosas integrales) son demasiado amplias para la razón pública. Las concepciones políticas deben tener, conforme a Rawls, tres características: 1) sus principios se aplican a la estructura básica de la sociedad; 2) pueden presentarse independientemente de la doctrina integral de cualquier tipo (aunque allí puede haber consenso traslapado con doctrinas integrales); y 3) se puede desarrollar a través de ideas fundamentales que se encuentran implícitamente en la cultura política pública de un régimen constitucional.

La razón pública requiere –prosigue Rawls –del uso de una concepción política que esté a debate. Sin embargo, Rawls establece como condición que este requisito permita introducir en la discusión política una doctrina integral (es decir, creencias políticas y religiosas), siempre y cuando se añadan correctamente razones del bien público para apoyar los principios y políticas que la doctrina pretendidamente esté ayudando.

Señala a ese respecto Rawls: “Propongo que en la razón pública las doctrinas comprensivas de la verdad o del derecho sean substituidas por una idea de lo políticamente razonable dirigido a los ciudadanos como ciudadanos”.

Ciertamente, el ideal rawlsiano –es decir, la práctica de la razón pública –es parte integrante de la aspiración de una sociedad bien ordenada: aquella que efectivamente está regulada por una concepción pública de la justicia social y en la que, como establece Rawls, "todo el

mundo acepte y sepa que otros aceptan los mismos principios de justicia," en el que "las instituciones sociales básicas generalmente satisficieran y se conocen para satisfacer estos principios "y en el que los ciudadanos más activos tienen un sentido normalmente eficaz de la justicia. Este *espíritu de reciprocidad* es el fundamento de una sociedad democrática.

La innovación de Rawls en este sentido es que reconcilia el problema de la justificación largamente reconocido con lo que él llama el *pluralismo razonable*. Es decir, “Nuestros conciudadanos razonables sostienen diferencias irreconciliables con respecto a sus diferentes doctrinas religiosas y filosóficas, incluyendo muchas de sus creencias sobre lo que es cierto en largas y disputadas cuestiones de fe y filosofía, metafísica y el sentido último de la vida”; lo que Rawls llama sus "conceptos integrales".

La idea de razón pública, como Rawls la entiende, pertenece entonces a una concepción de una sociedad democrática constitucional bien ordenada. La forma y el contenido de esa razón, -la forma como es entendida por los ciudadanos y como la interpretan –es parte de la misma idea de democracia. Esto es así porque una característica básica de la democracia es el pluralismo razonable.

Al respecto recomienda Rawls: “que en la razón pública las doctrinas integrales comprensivas de la verdad y el derecho sean sustituidas por una idea de lo políticamente razonable dirigida a los ciudadanos como ciudadanos”.

El requisito básico es que una doctrina razonable acepte un régimen democrático constitucional como un compañero de legítimo derecho. Más aún, tal razón es pública de tres maneras: como la razón de ciudadanos libres e iguales, es la razón del público; su tema es el bien público que concierne a preguntas fundamentales de justicia política fundamental, cuyas cuestiones son de dos tipos: fundamentos constitucionales y temas de justicia básica; y su naturaleza y contenido son públicos, siendo expresados en el razonamiento público por una familia de concepciones razonables de justicia política pensadas para satisfacer el criterio de reciprocidad.

Temas cruciales de la razón pública: razonabilidad y reciprocidad

De acuerdo a Rawls, la *razonabilidad* y la *reciprocidad* son virtudes públicas constitutivas de la ciudadanía liberal: ambas expresan nuestro compromiso (si estamos en el ámbito de la ciudadanía liberal) de contribuir junto con nuestros semejantes a apoyar una genuina moralidad y un empoderamiento que podemos abrazar unidos por los motivos que estemos compartiendo.

Las “personas razonables”, como establece Rawls, "desean por sí mismos(as) un mundo social en que ellos(as) se aceptan como libres e iguales, y pueden cooperar con otros en términos que todos puedan aceptar”. Es decir, Rawls insiste en que la reciprocidad debe existir dentro de ese mundo para que cada uno puede beneficiarse junto con otras personas.

Así, el voto ciudadano es sólo un medio –aunque ciertamente un medio muy importante – para hacer efectivo el debate público, siempre y cuando –se reitera –la oportunidad de votar se combine con la oportunidad de hablar y escuchar sin temor alguno. La fuerza y el alcance de las campañas electorales dependen –y aquí radica uno de los aspectos más singulares dentro de las posturas de Rawls respecto del ámbito comicial –en gran medida de la posibilidad de debate público abierto.

Las elecciones por sí solas pueden ser lamentablemente inadecuadas, como se observa con harta frecuencia, señala con pesimismo Rawls cuando hizo una dura crítica a las asombrosas victorias electorales de las tiranías gobernantes en regímenes autoritarios de la Unión Soviética de Stalin hasta el Iraq de Saddam Hussein.

Se puede sostener algo parecido respecto de la tradición del debate público. La herencia griega y romana sobre cómo debatir es particularmente importante para la historia del uso público de la razón, pero no fue única en el mundo antiguo. La importancia que asignaron al debate público los intelectuales budistas, recuerda Rawls como ejemplo, no sólo condujo a extensas deliberaciones sobre asuntos seculares y religiosos en la India y en Asia del Este y

Sureste, sino que también produjo algunas de los primeros cenáculos abiertos, dirigidos de manera específica a ventilar disputas en torno a distintos puntos de vista.

Estos "concilios" budistas, el primero de los cuales se llevó a cabo poco después de la muerte de Gautama Buda, alude Rawls, se ocupaban básicamente de resolver diferencias en prácticas y principios religiosos, pero lidiaban también con exigencias de las tareas sociales y civiles y ayudaban a establecer la práctica del debate abierto en temas contenciosos.

La validez del uso público de la razón

La validez del uso público de la razón se aplica asimismo al debate sobre la democracia. Es bueno que las prácticas democráticas hayan sido sometidas al agudo escrutinio de los textos sobre asuntos mundiales, pues existen deficiencias identificables en el desempeño de muchos países que poseen instituciones democráticas estandarizadas, establecen especialistas en materia de democracia internacional.

El debate público sobre estas deficiencias no sólo es un medio efectivo para tratar de remediarlas, sino que es así exactamente como se supone que debe funcionar la democracia, bajo la forma del uso público de la razón. En este sentido, los defectos de la democracia exigen más democracia, y no menos.

Los ciudadanos razonables quieren vivir en una sociedad en la que puedan cooperar con sus conciudadanos en términos que sean aceptables para todos, señala Rawls. Que además estén dispuestos a proponer y respetar normas mutuamente aceptables, dada la garantía de que otros también lo hacen, y además prometen honrar esas reglas, incluso cuando esto significa algún sacrificio para sus propios intereses. Los ciudadanos razonables quieren, en definitiva, pertenecer a una sociedad donde el poder político sea usado legítimamente.

La concepción política de la justicia social de Rawls

Señala Rawls: “Ahora voy hacia el contenido de la razón pública, habiendo considerado su naturaleza y bosquejado cómo puede disolverse la paradoja evidente de honrar a sus límites. Este contenido está formulado por lo que he llamado una ‘una concepción política de la justicia’, que supongo es ampliamente liberal en su carácter”.

“Con esto quiero decir –sigue Rawls, a quien se trata de glosar en este párrafo –tres cosas: en primer lugar, quiero especificar ciertos derechos, libertades y oportunidades de tipo familiar de los regímenes democráticos constitucionales; en segundo lugar, deseo asignar una prioridad especial a estos derechos, libertades y oportunidades, especialmente con respecto a los reclamos del bien público general y de los valores perfeccionistas; y en tercer lugar, deseo afirmar medidas asegurando a todos los ciudadanos medios adecuados para hacer uso efectivo de sus libertades básicas y de las oportunidades que se puedan presentar. Los dos principios enunciados caen bajo esta descripción general. Pero cada uno de estos elementos puede verse de diferentes maneras, así que hay muchos liberalismos”.

“Cuando digo que una concepción de la justicia es política –sigue dictando cátedra Rawls – quiero asimismo significar tres cosas: que se enmarcan para aplicar a la estructura básica de la sociedad, sus principales instituciones políticas, sociales y económicas como un sistema unificado de cooperación social; esto se presenta independientemente de cualquier doctrina religiosa amplia o filosófica integral; y se elabora en términos de ideas políticas fundamentales como implícitas en la cultura política pública de una sociedad democrática”.
(traducción de Francisco Muro)

En semejante tesitura, prosigue Rawls, “(...) ahora recurriré al contenido de la razón pública, habiendo considerado su naturaleza y esbozado cómo puede disolverse la aparente paradoja de honrar sus límites. Este contenido está formulado por lo que he llamado una ‘concepción política de la justicia’, que asumo que es ampliamente liberal en su carácter”.

“Al decir que una concepción de la justicia es política también me refiero a tres cosas (1): que está enmarcada para aplicarse únicamente a la estructura básica de la sociedad, sus principales instituciones políticas, sociales y económicas como un esquema unificado de cooperación social; (2) que se presenta independientemente de cualquier doctrina religiosa o filosófica comprensiva más amplia; y (3) que se elabora en términos de ideas políticas fundamentales consideradas como implícitas en la cultura política pública de una sociedad democrática”.

Asimismo, continúa Rawls en su argumentación: “(...) la razón pública implica directamente ese debate político, al menos en 'esencia constitucional', evitando cualquier apelación a valores morales, religiosos u otros valores morales comprensivos”.

Distingue Rawls para ellos tres partes del 'Foro político público' para que la idea de razón pública se aplique: 1) jueces, 2) funcionarios electos; y 3) el discurso de los candidatos a las oficinas públicas, especialmente en su oratoria pública, plataformas de partidos y declaraciones políticas.

Por otra parte, la razón pública no significa simplemente la razón secular. Doctrinas integrales seculares (como doctrinas religiosas integrales) son demasiado amplias para ser razón pública.

La razón pública requiere el uso de una concepción política que pueda y deba debatirse. Sin embargo, Rawls establece como condición para que se cumpla este requisito, el del debate, el cual nos permite introducir en la discusión política nuestra doctrina integral (religiosa, por ejemplo), para dar razones públicas correctamente y apoyar nuestros principios y políticas. “Nuestra doctrina y creencias, postula Rawls, nos pueden ayudar”.

Rawls cavila por otro lado que la razón pública no significa simplemente la razón secular. Doctrinas integrales seculares (como las doctrinas religiosas integrales) son demasiado amplias para incluirlas dentro de la razón pública.

Como ya se ha mencionado con antelación, la razón pública requiere el uso de una concepción política a debate. Sin embargo, Rawls establece como condición de que este requisito nos permita introducir en la discusión política nuestra doctrina integral, pues nuestra doctrina general ayuda a dar razones públicas correctamente para apoyar los principios y políticas públicas positivas para la población.

El ideal rawlsiano

La práctica de la razón pública es pues parte integrante del ideal de una sociedad bien ordenada: aquella que efectivamente está regulada por una concepción pública de justicia y en la que, sostiene Rawls, "todo el mundo acepta y sabe que otros aceptan los mismos principios de justicia". En la que "las instituciones sociales básicas generalmente satisfacen y se conocen generalmente para satisfacer estos principios. Y en la que los ciudadanos más activos tienen un sentido normalmente eficaz de la justicia. Este espíritu de reciprocidad es el fundamento de una sociedad democrática."

La innovación de Rawls en sus planteamientos es que reconcilia el problema largamente reconocido de lo que él llama el hecho del *pluralismo razonable*. "Nuestros conciudadanos razonables difieren de manera irreconciliable con respecto a sus diferentes doctrinas religiosas y filosóficas, incluyendo muchas de sus creencias sobre lo que es cierto en largas disputas sobre cuestiones de fe y filosofía, metafísica y el sentido último de la vida; es decir, de 'concepciones comprensivas'".

La razonabilidad y la reciprocidad –reitera Rawls –son virtudes públicas constitutivas de la ciudadanía liberal. Éstas expresan nuestro compromiso de contribuir, junto con nuestros semejantes, a apoyar una genuina moralidad pública, una que podamos abrazar juntos sobre bases que podamos compartir.

"Personas razonables", como establece Rawls, "desean para sí mismos un mundo social en el que ellos(as), como libres e iguales, pueden cooperar con otros en términos que todos

puedan aceptar. Ellos y ellas insisten en la reciprocidad que debe haber dentro de este mundo para que cada uno puede beneficiarse junto con las otras personas."

Entonces, el liberalismo político se basa en la conjetura de que los derechos y los deberes básicos, así como los valores políticos en cuestión, tienen tal peso que los límites de la razón pública se justifican por el conjunto de evaluaciones de las doctrinas comprensivas razonables, una vez que esas doctrinas se han ajustado a la concepción misma de la justicia.

En tanto que "(...) la razón pública, con su deber de civilidad, adopta, en lo tocante a la votación de cuestiones fundamentales, un punto de vista con ciertas reminiscencias de *El Contrato Social* de Rousseau". "Él (Rousseau) entendió el voto como expresión ideal de nuestra opinión acerca de qué alternativa promueve mejor el bien común". En otras palabras, lo recomendable en todo momento en la emisión del voto es inquirirse uno qué tanto promete el candidato o partido sobre la promoción del bien común.

Voy ahora –señala Rawls –al contenido de la razón pública, después de considerar su naturaleza y de esbozar el modo de disolver la aparente paradoja de respetar sus límites. "Ese contenido está integrado por lo que he llamado una 'concepción política de la justicia', de la que presumo su carácter liberal en un sentido amplio".

Sostiene Rawls: "Quiero decir con eso tres cosas: primero, la concepción de la justicia define ciertos derechos, libertades y oportunidades básicos (del tipo que nos es familiar en los regímenes constitucionales democráticos); segundo, otorga una prioridad especial a esos derechos, libertades y oportunidades, particularmente frente a las apelaciones al bien general y a los valores perfeccionistas; y tercero, proclama medidas tendentes a asegurar a todos los ciudadanos medios adecuados para cualquier fin que les permitan hacer uso efectivo de sus libertades y oportunidades básicas.

"Razonables y racionales como son –sigue en su disquisición Rawls-, y sabiendo que sostienen una diversidad de doctrinas religiosas y filosóficas razonables, los ciudadanos deberían ser capaces de explicarse unos a otros el fundamento de sus acciones en términos

tales que cada uno pudiera razonablemente esperar que los demás aceptaran como consistentes su propia libertad e igualdad. Intentar satisfacer esa condición es una de las tareas que el ideal de la política democrática nos plantea. Entender cómo conducirse uno mismo en tanto que ciudadano democrático, incluye la comprensión de un ideal de razón pública”.

Los ciudadanos sostienen el ideal de la razón pública, no como producto de un compromiso político, como si de un *modus vivendi* se tratara, sino a resultas de sus propias doctrinas razonables.

Cuando, por ejemplo, un grupo de ciudadanos clamamos a favor de la lucha contra la inseguridad pública, suponemos y lo hacemos público que estamos actuando en pro de la convivencia pacífica de la comunidad, no exclusivamente en pro de nuestro beneficio particular.

El ejercicio de la razón pública

Teniendo en cuenta sus proyectos similares, uno no debería sorprenderse que muchos han explorado la conexión entre el trabajo de Rawls, especialmente el de *Una Teoría de la Justicia* y los varios escritos de James Buchanan, otro autor contemporáneo de Rawls de gran relieve, quien propone una teoría de la elección pública. Siguiendo la idea del *Contrato Social* Buchanan crea todo un esquema para justamente echar luz respecto del porqué de la elección pública.

El voto ha sido discutido pormenorizadamente no sólo en la filosofía política contemporánea, sino también en la nueva disciplina de la teoría de la decisión social. La teoría de la decisión pública, influida por el razonamiento económico, así como por la idea política del proceso de toma de decisiones a través de la discusión, puede acrecentar la información sobre una sociedad de prioridades individuales. Dichas prioridades pueden responder a las inquietudes que se manifiestan en la deliberación pública.

Como sostiene James M. Buchanan: “Es importante considerar, dentro de un marco más amplio, dos objeciones generales a la defensa de la democracia que han ganado recientemente mucho terreno en los debates internacionales y que tienden a caracterizar las discusiones sobre los asuntos mundiales, particularmente en América y Europa”.

En primer lugar, sigue Buchanan, “existen dudas sobre lo que pueda lograr la democracia en los países más pobres. “¿No es acaso la democracia una barrera que obstruye el proceso de desarrollo y que desvía la atención de las prioridades del cambio social y económico, tales como proporcionar una alimentación adecuada, elevar el ingreso *per cápita* y llevar a cabo una reforma institucional?”

También se ha argumentado que un gobierno democrático puede no ser en absoluto liberal y que puede infligir sufrimiento sobre aquellos que no pertenecen a la mayoría gobernante de una democracia. “¿Acaso los grupos vulnerables no son mejor atendidos por la protección que provee un gobierno autoritario?”, inquiera Buchanan.

El voto como medio

En realidad, el voto es sólo un medio, aunque ciertamente un medio muy importante, para hacer efectivo el debate público, siempre y cuando la oportunidad de votar se combine con la oportunidad de hablar y escuchar sin temor alguno.

La fuerza y el alcance de las elecciones dependen en gran medida de la posibilidad del debate público abierto, argumenta Rawls. Las elecciones por sí solas pueden revelarse lamentablemente inadecuadas, como lo ilustran en abundancia las asombrosas victorias electorales de las tiranías gobernantes en regímenes autoritarios, desde la Unión Soviética de Stalin hasta el Iraq de Saddam Hussein, criticaba ácidamente el mismo Rawls.

La necesidad de adoptar una visión más amplia de la democracia, una visión que vaya mucho más allá de la libertad de elección y el voto, ha sido discutida pormenorizadamente no sólo en la filosofía política contemporánea, sino también en las nuevas disciplinas de la teoría de la decisión social y la teoría de la decisión pública, influidas ambas por el razonamiento económico, así como por las ideas políticas.

Desde la perspectiva más amplia del uso público de la razón, la democracia debe otorgar un lugar central y garantizar la libertad de discusión pública, y las interacciones deliberativas en la teoría y la práctica políticas no sólo a través de las elecciones ni sólo para las elecciones.

Lo que se requiere, como refiere Rawls, es el resguardo de la "diversidad de doctrinas, el hecho de la pluralidad", que resulta central para "la cultura pública de las democracias modernas", y que debe ser asegurado en una democracia por medio de "derechos y libertades básicos".

Pero, ¿hasta qué punto esto hace de la democracia un concepto básicamente occidental? Sostener esta opinión entraña dos dificultades importantes. El primer problema se refiere a la importancia del uso público de la razón, lo que nos lleva más allá de la estrecha perspectiva de la votación pública. La misma Atenas se destacó de manera importante por alentar el debate público, como lo hizo Grecia en general. Pero los griegos no eran los únicos en hacer esto incluso entre las civilizaciones antiguas, pues existe una vasta historia sobre el cultivo de la tolerancia, la pluralidad y el debate público también en otras sociedades, nos recuerda Rawls en sus textos.

El ideal del uso público de la razón está relacionado estrechamente con dos prácticas sociales particulares que merecen atención específica, arguye Rawls: la tolerancia hacia opiniones distintas, junto con la posibilidad de estar de acuerdo, como no estar de acuerdo; y el fomento al debate público, junto con la actitud de aprender de otros.

Tanto la tolerancia como la apertura del debate público se ven con frecuencia como rasgos específicos y tal vez únicos de la tradición occidental. ¿Qué tan correcta es esta noción?

Ciertamente, la tolerancia ha sido en gran medida un rasgo significativo de la política moderna occidental (exceptuando aberraciones extremas como la Alemania nazi o la administración intolerante de los imperios británico, francés y portugués en Asia y en África, como nos enseña Rawls en sus textos).

Aun así, difícilmente encontraremos aquí una división histórica tal que separe la tolerancia occidental del despotismo no occidental. Cuando Maimónides, el filósofo judío, fue obligado a emigrar de una Europa intolerante en el siglo XII, por ejemplo, se topó con un refugio tolerante en el mundo árabe, donde se le otorgó una posición honorable e influyente en la corte del emperador Saladino en El Cairo, el mismo Saladino que peleó por el islam en las Cruzadas.

Se puede sostener algo parecido respecto de la tradición del debate público, explica Rawls. De nuevo, la herencia griega y romana sobre el tema es particularmente importante para la historia del uso público de la razón, pero no fue única en el mundo antiguo. La importancia que asignaron al debate público los intelectuales budistas no sólo condujo a extensas deliberaciones, sino a la práctica respetuosa del debate.

Ignorar entonces la centralidad del uso público de la razón en la práctica de la democracia, no sólo distorsiona y limita la historia de las ideas democráticas, también distrae la atención lejos de los procesos interactivos a través de los cuales funciona una democracia y sobre los que ésta funda su éxito.

Señala, a su vez, Amartya K. Sen a este respecto que el descuido de las raíces globales del uso público de la razón, que constituye una pérdida en sí mismo, conlleva a la desolación de una comprensión adecuada del lugar y el papel de la democracia en el mundo contemporáneo. Incluso con la difusión del sufragio para los mayores de edad y las elecciones justas, la deliberación libre de censura es importante para que la gente sea capaz de determinar lo que debe exigir, lo que debe criticar y la forma en que debe votar. Consúltese <http://www.letraslibres.com/mexico/el-ejercicio-la-razon-publica>

La validez del uso público de la razón se aplica, entonces, al debate sobre la democracia misma. Es bueno que las prácticas democráticas hayan sido sometidas al agudo escrutinio de los textos sobre asuntos mundiales, pues existen deficiencias identificables en el desempeño de muchos países que poseen instituciones democráticas estandarizadas. El debate público sobre estas deficiencias no sólo es un medio efectivo para tratar de remediarlas, sino que es así exactamente como se supone que debe funcionar la democracia: bajo la forma del uso público de la razón. En este sentido, los defectos de la democracia exigen más democracia, y no menos.

La opción de tratar de subsanar los defectos de la práctica democrática a través del autoritarismo y la supresión del debate público incrementa la vulnerabilidad de un país a los desastres esporádicos (incluida, en muchos casos, la hambruna), y también a la desaparición paulatina de logros antes asegurados debido a la falta de vigilancia pública (como parece haber ocurrido, en alguna medida, con el sistema de salud chino), comenta Sen.

Una comprensión más cabal de las exigencias de la democracia y de la historia global de las ideas democráticas puede contribuir sustancialmente a mejorar la práctica política de hoy en día. Esta comprensión también puede ayudar a dispersar la niebla cultural artificial que oscurece la evaluación de los asuntos de actualidad.

La disminución de la capacidad de los sistemas políticos a nivel nacional basados en gestionar los problemas del mundo a escala global ha inducido al surgimiento de una sociedad civil global. Sin embargo, el término “civil societies”, un genérico de la etiqueta, agrupa varias formas dispares y a menudo contradictorias y competitivas de la organización y acción. Debe hacerse, en consecuencia, una distinción entre diferentes tipos de organizaciones.

Como comentan los expertos: existe un cuarto tipo de expresión de la sociedad civil global. Este es el movimiento de la opinión pública, conformada por turbulencias de información en un sistema de medios de comunicación diversificados y de la aparición de movilizaciones espontáneas, usando las redes de comunicación horizontales, autónomas.

La sociedad civil global tiene ahora los medios tecnológicos que existen independientemente de las instituciones políticas y de los medios de comunicación. Sin embargo, la capacidad de los movimientos sociales para cambiar la mente del público todavía depende, en gran medida, en su capacidad para moldear el debate en la esfera pública.

A manera de conclusión: La nueva esfera pública

El nuevo sistema político en un mundo globalizado emerge de los procesos de formación de una sociedad civil mundial y un estado de la red global que sustituye e integra a los Estados-Nación preexistentes sin adherirse a un gobierno mundial. Existe, en efecto, un proceso de aparición del gobierno mundial de facto sin un gobierno formal. La transición de estas formas pragmáticas de organización sociopolítica y toma de decisiones a un más elaborado sistema institucional global, requiere la coproducción de significado y de intercambio de valores entre la sociedad civil global y el estado global del Internet.

Sin duda, la sociedad civil global tiene ahora los medios tecnológicos que existen independientemente de las instituciones políticas y de los medios de comunicación convencionales. Sin embargo, la capacidad de los movimientos sociales para cambiar la mente del público en general todavía depende, en gran medida, de su capacidad para moldear el debate en la esfera pública.

La esfera pública, como se ha insinuado en este escrito, tomando sobre todo en consideración los significados que le han dado los autores que diseñaron el término y quienes lo han evaluado de manera empírica puntual, es el espacio de la comunicación de ideas y proyectos que emergen de la sociedad y están dirigidas a la toma de decisiones en las instituciones de la sociedad. La sociedad civil global, para esto, es la expresión organizada de los valores e intereses de la sociedad.

El proceso de globalización que estamos experimentando –frecuentemente de manera imperceptible –ha cambiado el debate del ámbito nacional hacia el global, y ha provocado la aparición de una sociedad civil global y formas varias de gobernanza global, aunque todavía muy delimitadas. En consecuencia, la esfera pública como espacio de debate sobre asuntos públicos también se ha desplazado de lo nacional a lo global y se expande cada vez más en torno a las redes de comunicación global.

Bibliografía utilizada en la composición de la ponencia

Panebianco, Angelo. 1990. Modelos de partido, organización y poder en los partidos políticos. Madrid: Alianza.

John Mandle and David A. Reidy. 2014. *A Companion to Rawls*, Blackwell Companion.

Sen, Amartya K. “El ejercicio de la razón pública”, <http://www.letraslibres.com/mexico/el-ejercicio-la-razon-publica>

Daniels, Norman, *Reading Rawls. Critical Studies on Rawls Theory of Justice*.

Freeman, Samuel (2003), *The Cambridge Companion to Rawls*. Cambridge University Press

Fraser, Nancy, Repensando la Esfera Pública, http://estudios.sernam.cl/img/uploads/fraser_esfera_publica.pdf

Gaus, Gerald, *The Order of Public Reason A Theory of Freedom and Morality in a Diverse and Bounded World* <http://www.gaus.biz/ChapterOne.pdf>

James Boettcher (2000), *James Rawls and Gaus on the Idea of Public Reason*. In: Thinking Fundamentals, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, Vol. 9: Vienna

Rawls, John. 2005. *Political liberalism* / Expanded ed., Columbia University Press, New York.

Rawls, John (1994), *La idea de una razón pública*, Isegoría 9, 1994

Rawls, John (1999), *A Theory of Justice, Revised Edition*

The Idea of Public Reason Revisited. Author(s): John Rawls. Source: The University of Chicago Law Review, Vol. 64, No. 3 (Summer, 1997), pp. 765-807. Published by: The University of Chicago Law Review

Vallier, Kevin, *Public Reason and Public Choice A Synthesis*, https://www.peter-boettke.com/app/download/.../Vallier_paper.pdf.

Ville Päivänsalo, *Balancing reasonable justice: John Rawls and crucial steps beyond (2007)*, *The Ashgate New Critical Thinking in Philosophy*